

A un paso del precipicio: la política argentina entre 1976 y 2008

Luciano de Privitellio

Universidad de Buenos Aires

Resumen: El artículo analiza algunos de los problemas de la construcción de la democracia en Argentina entre 1983 y 2008. Se trata del periodo más extenso de funcionamiento de un régimen democrático en este país. Sin embargo, una de las principales dificultades para su consolidación se encuentra en la ausencia de tradiciones democráticas que puedan expresarse en comportamientos, valores y actores institucionales adecuados. ¿Cómo, entonces, se articula este proceso con un pasado en el que la democracia no formaba parte del núcleo central de preocupaciones de la sociedad? El artículo intenta dar una respuesta prestando atención a las formas de construcción y legitimación del poder desde la irrupción de la última dictadura militar en 1976 hasta nuestros días.

Palabras clave: Argentina, política, democracia, dictadura.

Abstract: The aim of this article is to analyze some of the problems involved in the construction of democracy in Argentina between 1983 and 2008. This is the longest period ever for a democratic regime in this country. Nevertheless, one of the strikes for its consolidation is the lack of democratic traditions that could be expressed in behaviors, values and institutional actors. How does this process connect to a past in which democracy did not participate in society's concerns? This article proposes some answers focusing on the strategies developed in order to construct and to legitimate the political power since the last military dictatorial regime in 1976 up to today.

Key words: Argentina, politics, democracy, military dictatorial regime.

Este ensayo sobre los últimos cuarenta años de historia política Argentina se articula a partir de un par de preguntas centrales: ¿cómo se ha construido un régimen político democrático en una sociedad que carece por completo de tradiciones democráticas? Y, en relación con ella, ¿cómo se han organizado los principales actores políticos en función de esta construcción? En 1983, muchos argentinos creyeron estar retomando un sendero que les era propio y que, en todo caso, les había sido arrebatado por un grupo de militares vinculados a grupos minoritarios, aunque no por eso menos poderosos, de la sociedad. Sin embargo, una mirada sobre el pasado reciente y no tan reciente del país demuestra que aquello que en su momento fue visto en clave de recuperación fue, en rigor, una inauguración. El régimen político que se abrió en 1983 —aunque sólo sea por su extensa duración, más allá de su notoria inestabilidad— es del todo novedoso en la historia argentina, y debió hacer frente a problemas también inéditos y complejos. Por un lado, tal como afirma Tulio Halperín Donghi¹, el nuevo régimen coincidió con el problema de una economía sin rumbo fijo y que tuvo que hacer frente a sucesivas y agudas crisis, lo cual, a su vez, contribuyó a desarticular una forma de sociedad basada en principios de integración y de movilidad, sociedad que, según este mismo autor, suele ser identificada con el peronismo. Por el contrario, las formas de pobreza y marginalidad se multiplican y los mismos índices oficiales revelan una constante polarización social, poniendo a la política frente a desafíos del todo novedosos. Pero sobre este tono general, en el artículo se presta atención a otra dimensión de la política: la de las formas de construcción del poder y de la legitimidad del poder o, al menos, algunos de los aspectos principales de este problema que, por cierto, para un análisis detallado y completo requeriría un texto de otra extensión. Para eso, recorreremos el periodo desde la llegada de la última dictadura militar en 1976 hasta los conflictos que enfrenta en nuestros días el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. No se trata de un periodo cerrado y no se elige porque seamos capaces de dar al mismo una entidad y una coherencia interna: por el contrario, el final no sólo aparece como un final abierto, sino que, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, su devenir futuro se resiste a acomodarse a los presupuestos de políticos y analistas.

¹ HALPERIN DONGHI, T.: *La larga agonía de la Argentina Peronista*, Buenos Aires, Ariel, 1994.

La Dictadura: ¿una crisis de la democracia?

Cuando el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (alias «Isabelita») no hubo sorpresas: ya para entonces el escenario político y social montado sobre el uso indiscriminado y legítimo de la violencia política estaba maduro y la tragedia en plena marcha. Para comprender las razones es necesario remontarse brevemente al menos hasta la caída del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955². Luego de este golpe, se sucedieron gobiernos civiles y militares, todos ellos bajo el paraguas de algún tipo de restricción electoral que dejaba al peronismo, es decir, a una irreductible mayoría electoral, fuera del juego legal. Las estrategias varias que intentaron solucionar este problema llegaron siempre a un punto muerto. Pero la proscripción electoral del peronismo no significó su aislamiento. Por el contrario, sus lazos con los oficialismos y las oposiciones de turno fueron siempre muy estrechos y *aceitados*. En especial, pero no únicamente, los sindicatos siguieron siendo a la vez un campo de lucha y un fuerte soporte para el peronismo y el propio Perón.

Esta situación aceleró el profundo desprestigio de las formas políticas de la democracia liberal, cada vez más masivamente consideradas como falsas a la vez que insuficientes. A diferencia de lo sucedido en otras latitudes, donde la segunda posguerra ofreció a la democracia una nueva oportunidad (rompiendo el generalizado desprestigio que siguió a la Primera Guerra Mundial), en Argentina no sucedió nada de esto.

A esta convicción se sumó otra idea hegemónica según la cual Argentina, demasiado apegada a lo que se entendía como un arcaico

² Sobre el periodo véanse, entre otros, CAVAROZZI, M.: *Autoritarismo y Democracia (1955-1996). La transición del Estado al Mercado en la Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997; RIZ, L. de: *La política en suspenso, 1966-1976*, Buenos Aires, Paidós, 2000; PUCCIARELLI, A. (ed.): *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1999; GILLESPIE, R.: *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988; ALTAMIRANO, C.: *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires, Ariel, 2001; OLLIER, M. M.: *Golpe o Revolución. La violencia legitimada en la Argentina 1966-1973*, Caseros, EDUNTREF, 2005; ROMERO, L. A.: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001; SABORIDO, J., y PRIVITELLIO, L. de: *Breve historia de la Argentina*, Madrid, Alianza, 2006; JAMES, D.: *Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, t. IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

liberalismo económico, había perdido el rumbo de la modernidad y era necesario, por tanto, un cambio profundo e inmediato. A izquierda y a derecha, la creencia en la necesidad de una *revolución* se hizo evidente. La palabra se instaló en el centro de los lenguajes políticos, en tanto que refería al mismo tiempo a la concepción de una práctica política por fuera del sistema liberal democrático (incluyendo diversas dosis de violencia) en conjunción con un cambio redentor, que podía adoptar formas que iban desde una modernización industrialista en clave desarrollista hasta vagas utopías socialistas. Todas estas formas encontraban en un virulento nacionalismo antiliberal —que saturaba los discursos a izquierda y derecha del cada vez más radicalizado espectro político— un lenguaje común que permitía los diálogos y los conflictos.

La Revolución Argentina (1966-1973), tal fue el nombre adoptado por el régimen militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), se propuso originariamente un profundo cambio modernizador (a la vez desarrollista, corporativista y nacionalista) por una vía autoritaria basada en la fuerza militar. Mientras tanto, grupos juveniles (en general de clase media, con educación secundaria y universitaria) cada vez más radicalizados comenzaron a explorar la vía armada para imponer diversas variantes del socialismo, casi siempre acompañado del apelativo «nacional». La más exitosa de todas ellas, la agrupación Montoneros (cuyos principales dirigentes provenían del nacionalismo católico), encontró en su acercamiento al peronismo las razones de una efímera popularidad. En 1970, este grupo se dio a conocer en sociedad con el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, cabeza del golpe de 1955. Esta situación política empalmó con una creciente movilización y conflicto social, que fueron agravándose a medida que el autoritarismo de la Revolución Argentina acababa con otras formas de expresión.

Cuando en 1973 el peronismo finalmente volvió al gobierno, las tensiones ya no podían ser controladas. Ni siquiera la presencia de Perón en Argentina, que siempre había hecho del arte de azuzar los conflictos para aparecer como única alternativa una forma natural de ejercicio del poder, logró cumplir este objetivo. Como al bombero piromaniaco, el fuego de las rivalidades que había alentado escaparon a su control. La reacción no se hizo esperar: cuando la guerra entre los diferentes grupos peronistas llegó hasta las oficinas de la Presidencia, Perón tomó partido. Primero fueron las amonestaciones públicas

contra los jefes de las organizaciones guerrilleras, luego la represión descarnada. Desde el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, mano derecha de Perón, organizó a comienzos de 1974 un muy activo y eficaz grupo armado, la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, que desató una represión feroz sobre todo aquel que fuera considerado enemigo. La política replicó integralmente la lógica y los lenguajes de la guerra.

La muerte de Perón en julio de 1974 desató la hecatombe. A la guerra ya sangrienta entre diferentes grupos del peronismo, se sumaban las acciones de grupos armados de otras tendencias. Durante 1975, la violencia se hizo cotidiana y aumentó su nivel de exposición, brutalidad y alevosía. En la provincia de Tucumán, el Ejército Revolucionario del Pueblo (de orientación trotskista) pretendió instalar una guerrilla rural. En ese contexto, por orden de Isabel se produjo el avance de las Fuerzas Armadas, que tomaron el control de la represión. En una unidad militar de Córdoba se organizó el primer centro clandestino de detención. Según Novaro y Palermo, hacia finales de 1975 ya funcionaban en el país 14 centros donde se practicaban la tortura y los asesinatos clandestinos (las llamadas «desapariciones»), que ya involucraban también a opositores no combatientes³. En ese mismo momento, la capacidad operativa de las dos principales guerrillas, ERP y Montoneros, había disminuido mucho, pero todo estaba listo para el golpe por llegar. A nadie le sorprendió la noticia; incluso algunos grupos armados, como Montoneros, celebraron el golpe en tanto que pensaban que aceleraría la conflictividad social y la rebelión popular. Este diagnóstico se revelaría dramáticamente desacertado: una buena parte de la sociedad, que había visto con simpatía las primeras manifestaciones de violencia en contra del régimen de la Revolución Argentina y de ciertos personajes especialmente odiados, convivía ahora espantada por el cotidiano baño de sangre, demasiado cercano como para poder ser ignorado y, por eso, se mostraría dispuesta a pagar muy altos precios —entre ellos, la denostada democracia era el más insignificante— a cambio de objetivos mucho más modestos que los imaginados por la militancia juvenil radicalizada.

³ NOVARO, M., y PALERMO, V.: *La Dictadura Militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós, 2003; QUIROGA, H.: *El tiempo del «Proceso». Conflictos y coincidencias entre políticos y militares*, Rosario, Homo Sapiens, 2004; SURIANO, J.: *Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia (1976-2001)*, t. X, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Antes que la *revolución*, la paz y el orden, calcados en los impecables uniformes y en los gestos adustos de los jefes militares.

Tras el golpe, el gobierno quedó en manos de una Junta de Comandantes, compuesta por los jefes de cada una de ellas: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Ramón Agosti. La Junta debía elegir al presidente, elección que recajó sobre Videla, quien además retuvo su cargo de comandancia. Aunque la elección marcó cierto predominio del Ejército, lo cierto es que las cosas no eran tan simples. Videla era un representante de la línea «blanda» del Ejército, cuyo hombre fuerte no era el comandante-presidente, sino el general Roberto Eduardo Viola. En rigor, Videla era un oficial de muy escasas luces y que despertaba muy pocas simpatías entre sus camaradas. De hecho, dadas las diferencias internas dentro de las Fuerzas Armadas, ésa habría sido la razón que le habría permitido hacerse con la Comandancia durante el gobierno de Isabel. Dado que el ala «dura» del Ejército (integrado, entre otros, por los generales Luciano Benjamín Menéndez y Guillermo Suárez Mason) y Massera no querían acrecentar el poder de Viola, admitieron la unión de ambos cargos en la figura de Videla para evitar que el verdadero jefe asumiera la comandancia.

Los oficiales golpistas coincidían en un diagnóstico general: no sólo debían aniquilar los movimientos «subversivos» armados, sino que, para evitar repetir la experiencia, cabía reordenar la sociedad con puño firme. La represión fue, entonces, el eje de los consensos. También coincidieron en que la política (al cabo, expresión de esa sociedad) debía ser silenciada y mantenida lejos del nuevo régimen. Las Fuerzas Armadas eran los únicos sujetos habilitados para liderar la completa regeneración de la sociedad. Aquí terminaban las coincidencias.

Para el grupo de los «blandos», la patología de la sociedad la conformaban el populismo y los conflictos corporativos, expresión del cambio de rumbo impuesto desde la gran crisis de 1930 que había hecho del Estado el actor principal del mundo económico. El equipo económico, liderado por José Alfredo Martínez de Hoz, fue el gran artífice de este diagnóstico, sustentado además en los vientos conservadores que avanzaban desde la crisis de 1973. Desarticular el Estado intervencionista, imponer las reglas del mercado y, si era necesario, desindustrializar la economía eran parte de una receta económica y de un modelo social y político. Ciertamente, sobre este modelo imaginado se instaló un proceso real de corrupción en el que no el mercado

sino el mismo Estado al que se decía estar achicando favorecía una formidable concentración económica. Pero más allá de estas consecuencias reales, la política económica declamada contó con fuertes oposiciones entre los militares. Incluso los «blandos» pusieron condiciones para, por ejemplo, evitar el desempleo. Los «duros» y los marinos, más cercanos a posiciones industrialistas, nacionalistas y desarrollistas muy populares entre los oficiales, boicotearon el equipo económico con el que emprendieron una sorda lucha. Se negaron, por ejemplo, a privatizar empresas estatales que, en cambio, fueron repartidas como botín entre las fuerzas.

La Dictadura, lejos de asimilarse a un bloque monolítico comandado con mano de hierro (al estilo del pinochetismo chileno), era, entonces, una federación anárquica en la cual las diferentes armas y los distintos cuerpos del Ejército en sus áreas de influencia no reconocían ninguna autoridad superior. Incluso el gabinete de ministros fue repartido, y éstos ya no respondieron ante el presidente, sino ante el comandante correspondiente. Cada una a su manera, sólo la represión y la rapiña económica pudieron mantener cierta unidad. Mientras que ésta debía ser ocultada o, al menos, negada, la represión adquirió un verdadero tono misional. Si bien en 1985 la justicia probó la existencia de un plan sistemático, la forma concreta que asumió la represión fue mucho más anárquica de lo que ese plan parece mostrar, dependiendo de los perfiles y caprichos de los jefes locales. La creencia de que estaban en una guerra contra un enemigo de la nación aglutinó a los oficiales (también a grupos civiles que los apoyaron, muchos de ellos provenientes de Tres A), en una causa común. Allí donde no existía la autoridad, la misión cohesionaba. Pero una obediencia así ganada implicaba amplios campos para la arbitrariedad y la autonomía de los llamados «grupos de tareas».

Siguiendo las líneas ya ensayadas durante el largo año de 1975, se organizaron campos y centros de detención. Allí, las torturas eran cotidianas en espera de la delación o, simplemente, como expresión de un infinito sadismo. Si bien los centros eran más o menos ocultos, las detenciones no lo eran: los automóviles Ford Falcon de color verde y los camiones militares circulaban por la ciudad repletos de hombres armados. Tampoco podían disimular las ausencias: los organismos de derechos humanos han consensuado una cifra simbólica, 30.000 desaparecidos, aunque los registros y las denuncias existentes llevan la cifra a algo menos de la mitad. Si bien no se trató de una

represión indiscriminada, afectó no sólo a los combatientes de grupos armados, sino también a militantes sindicales, estudiantiles, barriales e intelectuales.

Pero el estilo a la vez clandestino y visible de la represión se orientó también al resto de la sociedad. Ciertamente, nadie veía lo que sucedía en los campos pero tampoco era muy difícil imaginarlo, y menos aún a medida que se multiplicaban las denuncias internacionales. Fue ésta otra de las razones de lo que Novaro y Palermo llaman «consenso reactivo»⁴: no implicaba adhesión activa, ni mucho menos, pero sí cierta indiferencia que aceptaba convivir con esta forma de terror a cambio de no tener que hacerlo con otras formas, más visibles, como las del año 1975. «Por algo será» fue la popular frase acuñada al respecto.

El terror se acompañaba de formas de censura y autocensura. El autoritarismo se instaló en múltiples ámbitos de la sociedad, empezando por los laborales y educativos que, repentinamente, se saturaron de pequeños jefes dispuestos a ejercer su poder de modo arbitrario. Pero no era ésta una gran novedad: bajo el alto grado de conflictividad social y política de finales de los años sesenta y principios de los setenta, que alienta miradas un tanto ligeras en clave de «anarquía» o «liberación», se oculta mal una fuerte tendencia de la sociedad hacia las prácticas autoritarias, correlato natural del descreimiento generalizado por las formas democráticas y el pluralismo, que estaban lejos de haber desaparecido y que, en rigor, constituyeron el humus fértil en el cual la Dictadura hundió sus raíces.

La irregular organización del gobierno durante la Dictadura, caracterizada por una notoria distancia entre los discursos normativos (no sólo de los constitucionales, naturalmente, sino también de aquellos impuestos por el régimen) y la administración anárquica del Estado, instaló además una sostenida práctica de corrupción. Como afirma Romero⁵, la ilegalidad penetró en todo el organismo estatal y desde allí irradió a la sociedad. Ciertamente, nada de esto sucedió sobre una tabla rasa: por el contrario, se trataba de una sociedad que ya había encarnado la convicción de que las leyes no eran necesarias porque eran meros artilugios de tibios o burgueses, pero si antes esta convicción había permitido legitimar el uso indiscriminado de la vio-

⁴ NOVARO, M., y PALERMO, V.: *La Dictadura Militar...*, op. cit.

⁵ ROMERO, L. A.: *Breve historia contemporánea de la Argentina...*, op. cit.

lencia para implantar modernizaciones aceleradas o paraísos socialistas, ahora, ajena a tan elevados fines, se convertía en simple arbitrariedad y corrupción. Como veremos, un legado profundo que heredaría sin beneficio de inventario la democracia que estaba por llegar y que aún en nuestros días actúa como una de las formas privilegiadas de construcción de poder económico y político en Argentina.

El derrumbe

A finales de 1978 todo parecía tranquilo. El clima festivo generado por el campeonato mundial de fútbol y una cierta disminución de la represión impulsaron una tibia apertura que apuntó tanto a la política como a la actividad sindical. Aportó también su parte el efímero bienestar económico, la «plata dulce». Incluso se impuso la normalidad institucional del régimen cuando, a finales de 1978, Videla abandonó la comandancia que pasó a manos de Viola. Es cierto que el Mundial colocó la represión en las páginas de los diarios del mundo pero, en contrapartida, miles de coches circularon por las ciudades argentinas con una pegatina que aseguraba que «Los argentinos somos derechos y humanos». Mientras, la idea de que el mundo gozaba al embarcarse en una perversa «campaña antiargentina» era repetida con fervor patriótico. Sólo la reaparición de algunos ataques de Montoneros implicó una llamada de atención.

Pero el veranito no duró. El desconocimiento de un laudo arbitral británico que daba la razón a Chile en la disputa por tres islotes en la boca del estrecho de Beagle, comenzó una escalada bélica con movilización de tropas hacia la frontera. Sólo la intervención en el último minuto de Juan Pablo II, a través del cardenal Samoré, logró un acuerdo a finales de diciembre de 1978. Sin embargo, signo de la debilidad de los mandos, algunas tropas argentinas llegaron a atravesar la frontera para internarse varios kilómetros en suelo chileno.

Los dos años siguientes, hasta el reemplazo de Videla por Viola en la presidencia, señalaron un constante retroceso del régimen, caracterizado por retornos espasmódicos e intensos de la represión. En el plano nacional, las denuncias de las Madres de Plaza de Mayo —entre otros organismos— eran cada vez más notorias. En 1980 Adolfo Pérez Esquivel, un activista de derechos humanos, fue galardonado con el premio Nobel: un claro mensaje para la Dictadura. En otros

ámbitos, la actividad política parecía renacer, y hasta la CGT llamó a un paro general. En los últimos meses de 1981, un organismo creado por los principales partidos políticos, la Multipartidaria, hacía público su primer documento crítico. Ante esta situación, aumentaron los disensos entre los oficiales: las alternativas eran muchas pero, dado que ninguno de los grupos lograba imponerse, se trataba de un juego de vetos mutuos sin una salida visible.

En 1981 Viola fue elegido por los comandantes, no sin debates, para un nuevo mandato presidencial. Viola intentó manejar la situación sobre la base de dos líneas: por un lado, un giro heterodoxo en la política económica; por otro, una apertura política que debía incluir la incorporación de civiles amigos (la «cría del Proceso»). Pero nada de esto daba resultado y, para empeorar las cosas, un nuevo clima de tensión con Chile —consecuencia del arbitraje papal que confirmaba los derechos chilenos sobre las islas— alimentaba a los más duros y belicistas. A finales de 1981, un golpe palaciego aprovechó la enfermedad de Viola para desplazarlo e imponer como presidente al comandante del Ejército Leopoldo Galtieri, un nacionalista duro, dispuesto a terminar con las políticas de apertura, reinstalar la represión, volver a la política económica ultraliberal y, de ser necesario, dar un gran salto hacia adelante que incluyera una aventura militar.

El 30 de marzo de 1982, un exitoso paro con movilización terminó en una generalizada represión en pleno centro de la capital. Entonces, la aventura se concretó. El 2 de abril, tropas argentinas ocuparon las islas Malvinas, nombre con el que se conoce a las islas británicas Falkland. El gobierno confiaba en que Gran Bretaña negociaría una vez conocido el golpe de mano y, además, Galtieri esperaba contar con el apoyo del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Reagan, en principio, intentó mediar pero, dado que la actitud de Thatcher fue inflexible, finalmente la respuesta fue contundente: Gran Bretaña, con el apoyo de los Estados Unidos, recuperó las islas tras el envío de una poderosa flota. En pleno combate, la atomización de los mandos militares se hizo sentir con todo su rigor, mientras que las principales tropas argentinas siguieron apostadas en la frontera chilena a la espera de un potencial ataque que nunca llegó.

La dimensión política local del conflicto, en cambio, fue más compleja. Inicialmente, la jugada de Galtieri pareció tener éxito. No sólo consiguió el apoyo explícito de buena parte de la sociedad y de los partidos políticos, sino que, además, pudo saborear el gusto de

hablar en una Plaza de Mayo repleta de manifestantes. Galtieri llegó a pensar que él podía ser el beneficiario de esta activa movilización; sin embargo, no alcanzó a comprender hasta dónde esos sentimientos se dirigían más bien hacia el objetivo que hacia su personaje de líder plebiscitario. El día en que se anunció la rendición, no tuvo mejor idea que convocar nuevamente al «pueblo» en la Plaza de Mayo: a las pocas horas ordenó una feroz represión policial ante el tono abiertamente crítico de quienes se habían convocado. Si bien los primeros pasos hacia una movilización más activa de la sociedad precedieron la invasión de las islas y encuentran su explicación en el agotamiento del modelo del consenso reactivo, los agitados días de la guerra de Malvinas cristalizaron en una presencia de la sociedad y de sus dirigentes políticos y sociales en las calles y en los medios de opinión que ya no habrían de retroceder. Los días de la Dictadura estaban contados y sólo quedaba saber cómo iban a administrar su retirada: desde la derrota militar hasta los desaparecidos, pasando por la economía en llamas, todo apareció repentinamente en una agenda para la cual los responsables del régimen sólo pudieron ensayar explicaciones balbucientes.

La democracia todopoderosa ⁶

La derrota en Malvinas precipitó la caída de Galtieri y, con él, el derrumbe del régimen militar, ahora comandado por el general Reynaldo Bignone. Una vez definidos los plazos de la salida electoral, los dos principales partidos, radicales y peronistas, comenzaron a organizarse para la contienda. La casi totalidad de los analistas políticos anunciaba una victoria inevitable del peronismo, pero esta generalizada convicción era el principal activo político de un partido que, en cambio, tenía pocos elementos para mirar hacia el futuro con optimismo. Los sindicatos eran su única estructura institucional, pero era justamente un sindicalismo demasiado asociado al uso de la violencia

⁶ Sobre el periodo, entre otros, PUCCIARELLI, A. (coord.): *Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia al poder?*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006; NUN, J., y PORTANTIERO, J. C. (comps.): *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Buenos Aires, Punto Sur, 1987; ABOY CARLES, G.: *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*, Rosario, Homo Sapiens, 2001.

y de las prácticas reconocidamente mafiosas.⁷ Su candidato presidencial, Ítalo Luder, no sólo había participado en la primera línea del gobierno de Isabel, sino que, además, repetía declaraciones inoportunas, entre ellas que la ley de *autoamnistía* dictada por Bignone para lavar las culpas de la represión militar era «jurídicamente irreprochable». Todo esto interpelaba mal a una sociedad cuyo cansancio por la violencia política no se había esfumado y que ahora asociaba su búsqueda de paz con las formas democráticas y un cerrado repudio a la Dictadura. Aunque no todos lo advertían, esta situación implicaba un cambio notable: se descubría ahora el valor de la tan denostada *democracia formal*, de las instituciones constitucionales y de los partidos políticos, que recibieron en pocos meses una avalancha de cientos de miles de afiliaciones. A esto se sumaba la presencia de multitudes en calles, plazas y estadios con motivo de cada acto político.

Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR)⁸ contaba con varias ventajas: una estructura partidaria en la que no faltaban las disidencias, pero sólida y disciplinada; un candidato renovador y carismático, Raúl Alfonsín; una campaña que supo interpelar los ánimos sociales al centrarse en los valores de la democracia, la paz y los derechos humanos. En una clave fuertemente regeneracionista, Alfonsín aseguraba en cada acto que «con la democracia se come, se cura, se educa...». Así, sucedió lo que pocos se habían atrevido a pronosticar: la UCR ganó las elecciones presidenciales con un porcentaje de casi el 52 por 100 de los votos, aunque la derrota peronista estaba lejos de ser un desbande: había sacado poco más del 40 por 100 de los votos, retenía una gran cantidad de gobernaciones y la mayoría en el senado. El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió la primera magistratura.

La concepción regeneracionista de la democracia que se generalizó en esos meses no era simplemente una visión más o menos errada acerca de las potencialidades del nuevo régimen. Carente de pilares más reales implantados en prácticas, tradiciones y costumbres, esta concepción se convirtió en el principal apoyo del régimen y, por extensión, en el capital político más importante para Alfonsín, su más eficaz intérprete. Tampoco era una simple mirada dado que, por varios meses, se tradujo en un alto grado de movilización de la socie-

⁷ LEVITSKY, S.: *Transformación del Justicialismo: Del Partido Sindical al Partido Clientelista*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

⁸ PERSELLO, A. V.: *Historia del Radicalismo*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

dad y en un estilo político del todo novedoso que encontraba en el debate y la palabra un valor. Su importancia se revela en la renovación encarada por un importante grupo de dirigentes peronistas (Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Manuel de la Sota) que, en desacuerdo con el estilo de sus dirigencias tradicionales, intentaron hacer del peronismo un partido acorde con la nueva situación. En 1985 formó su propio bloque en el Congreso y finalmente se presentó con éxito a las elecciones fuera del partido. Hacia 1986, sus principales referentes ya dominaban el partido: para entonces, la estrella del peronismo renovador iba en franco ascenso, a medida que el gobierno se enfrentaba crecientes dificultades⁹.

Pero en su doble rol de base de legitimidad y de capital político, esta versión de la democracia proyectó un fiel demasiado elevado para un gobierno que tendría que hacer frente a problemas muy serios al menos en tres áreas: la económica, la sindical (la CGT decretó trece paros generales contra el gobierno) y la militar. Los argentinos descubrieron que a despecho de todo voluntarismo, con la democracia no necesariamente se come, ni se cura ni se educa y que, más aún, tal vez ni siquiera sea posible hacer justicia. Pero lejos de toda crítica a las ilusiones originales, la dinámica política llevó muy rápidamente a buscar a los culpables del caso: de nuevo, se trataba de describir fuera de ella misma las razones de las desilusiones, y el gobierno de Alfonsín fue el principal blanco.

La cuestión militar, en tanto que constituyó el nudo de la concepción regeneradora de la democracia, muestra a la vez el funcionamiento y los límites de esta cultura política. La imagen categóricamente negativa de la Dictadura posibilitó, por contraste, señalar las infinitas bondades del régimen que se estaba inaugurando: si con la democracia no sólo se disfrutaba de paz y libertad, sino que además se comía, educaba y curaba, era porque evidentemente con la dicta-

⁹ La hipótesis de la importancia de la visión alfonsinista en la conformación de la renovación, en ALTAMIRANO, C.: «La lucha por la idea: el proyecto de la renovación peronista», en PALERMO, V., y NOVARO, M. (comps.): *La historia reciente. Argentina en democracia*, Buenos Aires, Edhasa, 2004. Véanse también PALERMO, V., y NOVARO, M.: *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires, FLACSO-Norma, 1996; IPOLA, E. de: «La difícil apuesta del peronismo renovador», en NUN, J., y PORTANTIERO, J. C. (comps.): *Ensayos sobre la transición democrática...*, op. cit.; BRACHETTA, M. T.: «La Renovación Peronista. Promesa y decepción del peronismo en los '80», en *XI Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia*, 19-22 de septiembre de 2007, Tucumán.

dura tales cosas no sucedían. De esta manera, la demonización absoluta del gobierno militar como autor de casi todos los males de Argentina, una visión que no resiste el menor contraste con la realidad, se convirtió, sin embargo, en una condición para el funcionamiento de una democracia sin mayores raíces. Al presentar el conjunto de la sociedad como una víctima, se la asoció también con una supuesta tradición democrática que habría sido rota por unos pocos culpables, por lo general uniformados. Asimismo, ocultó las dudas sobre muchos miembros de la propia clase política, que pudieron renacer libres de toda relación con el reciente baño de sangre.

La investigación de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) que culminó con la presentación del informe «Nunca Más», en septiembre de 1984, y el fallo de la Cámara Federal contra las Juntas, en diciembre de 1985, fueron contundentes: describieron la represión como un plan criminal y se dictaron penas de prisión perpetua y degradación para los principales responsables¹⁰. Las Fuerzas Armadas lanzaron su desafío, inicialmente a través de declaraciones, luego alentando un clima de tensión que incluyó amenazas de bomba y atentados, finalmente con sendas sublevaciones armadas. En la Semana Santa de 1987 se produjo la primera de ellas. En una reacción contundente, las plazas del país se llenaron de manifestantes, y la clase política —incluyendo a la oposición— se abroqueló alrededor del presidente y las instituciones. Pero el Ejército se negó a reprimir a los sublevados, con lo cual todo terminó en un acuerdo que puso fin a otros juicios que estaban en marcha. Al año siguiente se produjeron otros dos levantamientos detrás de los cuales ya no aparecía exclusivamente una reivindicación el gobierno sino una lucha interna dentro de la fuerza entre los cuadros medios y la comandancia. Las dificultades para detener la reivindicación corporativa provocaron que la visión regeneracionista de una democracia todopoderosa se volviera contra el gobierno, el cual fue acusado por la claudicación sin que las acusaciones midieran siempre la fuerza relativa de los contrincantes.

¹⁰ CONADEP: *Nunca Más*, Buenos Aires, Eudeba, 1984. En 2006 apareció una nueva edición con nuevos anexos y un prólogo ajustado a las nuevas visiones sobre los años de plomo. Sobre esta espinosa cuestión, VEZZETTI, H.: *Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002; SARLO, B.: *Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005; ROMERO, L. A.: «La memoria del Proceso argentino y los problemas de la democracia: la memoria, el historiador y el ciudadano», *Lucha Armada*, 10 (2008).

Con la victoria electoral de 1985, el gobierno de Alfonsín alcanzó su pico de popularidad. En 1986, las dificultades se multiplicaron: a la cuestión militar, se agregó la oposición de sindicalistas, de empresarios y de la Iglesia, quienes atacaban a un gobierno que además no podía controlar la inflación que renacía. Al año siguiente, Alfonsín lanzó un ambicioso paquete reformista que incluyó un eventual cambio de la Constitución para ir hacia un sistema parlamentario, un plan de privatizaciones de las empresas públicas y el traslado de la capital federal a la ciudad de Viedma, en el sur del país. Pero ese mismo año las elecciones de gobernadores y legisladores fueron ganadas por el peronismo y la propuesta fue rechazada. La debacle económica no pudo ser detenida y un nuevo paro general culminó con actos de violencia y saqueos.

El verano de 1989 deparó al gobierno los golpes de gracia: a una crisis energética que obligó a realizar cortes masivos de electricidad se sumó el frustrado intento de copar el cuartel de La Tablada por parte del Movimiento Todos Por la Patria, que culminó con la muerte de algunos reclutas y la de varios militantes del grupo. La opinión mayoritaria coincidió en que se trataba de un grupo de asesinos que buscaban imponer ideas trasnochadas: paradójicamente, el MTP habilitó así una relectura de los hechos de los años setenta cada vez más favorable a la derecha, un giro que finalmente terminaría por imponer el peronismo en el poder.

La elección presidencial se polarizó entre un candidato oficialista con muy pocas opciones, el gobernador de Córdoba Eduardo Angeloz, y el candidato del peronismo, el gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Menem, cuya oscilante trayectoria política le había llevado desde un apoyo ilimitado a Isabel en 1983 hasta un tibio acercamiento a la renovación peronista, pasando por una época de apoyo a Alfonsín, y que había derrotado a Cafiero en una lucha interna partidaria, adoptó para la campaña la pose de un caudillo populista aun en su aspecto físico, y criticó al gobierno por sus múltiples flancos débiles, mientras aseguraba conocer la solución para todos los problemas (sin que nunca se le oyera decir cuáles eran esas soluciones).

Pocas semanas más tarde, las elecciones presidenciales arrojaron una contundente victoria de Menem. Mientras, la debacle económica siguió su escalada hacia la hiperinflación y la crisis se convirtió en un conflicto político y social desatado. El estallido llegó en forma de saqueos y movilizaciones violentas que se sucedieron sin solución de

continuidad por todo el país. Impotente, Alfonsín renunció a la presidencia para adelantar el traspaso de la misma a Menem. El gobierno que había llegado al poder como promesa de una democracia redentora y todopoderosa huía precipitadamente, rodeado por el caos y el desconcierto social.

El menemismo ¹¹

La llegada de Menem al gobierno el 9 de julio de 1989 se produjo en medio de una catástrofe generalizada que estaba dejando al Estado argentino sin capacidad de acción sobre la sociedad, jaqueado tanto por los grupos corporativos que presionaban con éxito sobre su estructura como por una crisis política, económica y social que parecía incontrolable. La hiperinflación revelaba, así, su significado más profundo: la *licuación* cotidiana del valor de la moneda no era sino una expresión más, tal vez la más dramática, de una *licuación* similar del poder del Estado que debía avalarla: reconstruir la capacidad de ese Estado se convirtió, entonces, en la principal tarea que debía emprender el gobierno. La primera actitud fue algo así como un reconocimiento de su debilidad, ya que ofreció la dirección económica a la poderosa empresa multinacional Bunge y Born, pero la maniobra resultó un rotundo fracaso y, todavía a comienzos de 1991, la cuestión económica no estaba resuelta.

Una actitud similar siguió Menem con respecto al problema militar, aunque en este caso su política fue más inteligente y arrojó mejores resultados: apenas jurado el cargo, indultó a 277 militares y civiles comprometidos con la represión, junto con algunos carapintadas y militantes montoneros, en nombre de la «reconciliación nacional». Además, prometió indultar a los comandantes condenados, aunque

¹¹ Sobre el periodo, entre otros, PALERMO, V., y NOVARO, M.: *Política y poder...*, *op. cit.*; QUIROGA, H.: *La Argentina en Emergencia Permanente*, Buenos Aires, 2005; BORÓN, A., et al.: *Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en la Argentina*, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1995; CAVAROZZI, M., y ABAL MEDINA, J. M. (comps.): *El asedio a la política. Los partidos Latinoamericanos en la era neoliberal*, Rosario, 2002; SIDICARO, R.: *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, 2001, y *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-1955, 1973-1976, 1989-1999*, Buenos Aires, 2002; ABOY CARLES, G.: *op. cit.*; NOVARO, M.: «Los partidos argentinos en los 90. Los desafíos de la competencia, la sucesión y la alternancia», *Estudios Sociales*, 15 (1998).

preferió postergar esa decisión. Mientras tanto, azuzó las divisiones internas que se habían revelado durante los levantamientos de carapintadas pero, aunque durante la campaña alentó a todos los sectores, una vez en el gobierno se inclinó a favor de las máximas jerarquías. Por eso, cuando a finales de 1990 se produjo un nuevo levantamiento de carapintadas, esta vez la represión ordenada por los comandantes fue feroz y eficaz. A los pocos días, Menem indultó a Videla y a Masera, junto con el jefe montonero Mario Firmenich. Más tarde, aprovechó el asesinato de un recluta para terminar con el servicio militar obligatorio que regía desde comienzos del siglo. Finalmente, rebajó el presupuesto militar a la vez que, siguiendo una línea que como veremos impondría en otras áreas de la política, abrió las puertas para que los altos oficiales participaran en negocios tan provechosos como turbios. Así, las Fuerzas Armadas —ya ampliamente desprestigiadas— perdieron buena parte de su poder y dejaron de ser una opción política. Un ciclo de la historia argentina parecía haberse cerrado.

Solucionado el problema militar, era la crisis económica la que amenazaba con *licuar* el poder presidencial. A este respecto, Menem hizo suyo el diagnóstico neoliberal: la crisis era consecuencia del amplio abanico de actividades que había pretendido ejercer el Estado, por lo que consideró necesario recortar drásticamente sus actividades. Así, el neoliberalismo vino a ofrecer un diagnóstico y una eventual solución para un proceso cuyas raíces eran mucho más complejas de lo que esas ideas, que circularon en Argentina en una versión caricaturizada, podían ofrecer. Desde el punto de vista político, la adopción del credo neoliberal tenía un problema, ya que suponía una total revisión de lo que hasta ese momento se consideraban las creencias más profundas del peronismo. Ya con la proclamación de los indultos a los ex comandantes, un grupo conocido como Grupo de los Ocho, liderado por Germán Abdala y Carlos «Chacho» Álvarez, había roto con el partido. Sin embargo, el presidente contó con algunos factores que, a la larga, llevaron al éxito de su empresa: lo convirtieron en un presidente popular —ganó todas las elecciones hasta 1997— y en jefe del peronismo.

Menem tenía en la crisis económica tanto su más complejo desafío como su mejor baza: si pudo acometer con éxito la dolorosa empresa de reforma neoliberal del Estado y la economía fue porque el vacío, la anomia, la desesperación y la incertidumbre provocadas por la propia crisis le abrieron una amplia base de legitimidad. Este notable con-

senso social desconcertó a los peronistas críticos y les restó capacidad de reacción. Como ha afirmado Quiroga, la «emergencia permanente», la idea de que Argentina se encuentra siempre al borde de un precipicio, funciona como una forma de legitimidad para cualquier tipo de medida oficial, incluso las de escasa legalidad¹². A partir de la llegada de Domino Cavallo al Ministerio de Economía en 1991, el plan de convertibilidad y la llegada fluida de créditos externos permitió terminar con la inflación y generó un clima de estabilidad.

La economía fue, además, el principal mecanismo para disciplinar a su propio partido y a los principales sindicatos peronistas. Menem advirtió con lucidez que la tradición peronista a la que atacaba sin piedad iba a tener mucho menos peso en la definición de las lealtades que las necesidades concretas de los dirigentes para mantenerse en el poder. Desde los gobernadores hasta los intendentes y concejales, pasando por los ministros y secretarios, todos habían aprendido que la disponibilidad de los recursos del Estado era fundamental para lograr este objetivo. El flujo irregular de fondos públicos adquirió, así, una dimensión política crucial en la construcción del poder: las redes de corrupción se extendieron desde la presidencia hasta la más insignificante oficina, dando a quienes controlaban el acceso a la porción correspondiente de dinero público una enorme cuota de autoridad sobre sus subordinados.

Este sistema se implantó en una sociedad y en una estructura estatal acostumbrada a estos tratos: las sucesivas versiones regeneradoras de la democracia nunca implicaron un compromiso similar con el respeto a las normas y a las leyes; «roba pero hace» fue la expresión manifiesta de esta actitud. Un ejemplo notable se vincula a la relación entre la creciente pobreza y los réditos electorales. Ciertamente, el clientelismo no era una novedad en Argentina y tampoco involucraba exclusivamente a un único sector social, pero la creciente pobreza y el desempleo, que eran consecuencia tanto de la crisis como de las soluciones planteadas para salir de ella, se convirtieron en una cantera cada vez más funcional para la reproducción del poder político. Se instaló, así, una lógica perversa y novedosa según la cual aquellos mismos que mediante la aplicación de políticas públicas y de la corrup-

¹² QUIROGA, H.: *La Argentina...*, *op. cit.* Véase, también, NAVARRO, M.: «Democracia y reformas estructurales: explicaciones de la tolerancia popular al ajuste económico», *Desarrollo Económico*, 139 (1995), vol. 35, pp. 443-466.

ción generalizada multiplicaban la pobreza, especialmente en los grandes cordones suburbanos, se beneficiaban políticamente con ella. Aunque estas clientelas no eran suficientes necesariamente para ganar unas elecciones —en algunos distritos son, de todos modos, fundamentales—, ofrecían a quien pudiera disponer de ellas una importante base para las disputas dentro de partido, para el control de las calles y para demostrar eventuales apoyos públicos. Así, aunque la corrupción no era una novedad en el Estado, Menem la convirtió en un verdadero método de dominación y disciplina políticas. La deslealtad hacia el jefe político de turno implicaba el riesgo de perder el acceso a esta fuente rápida y segura de riqueza, aunque el sistema funcionó en aquellos años de forma muy descentralizada¹³. El rígido control del poder judicial garantizó la impunidad; para eso, Menem modificó la estructura de la Corte Suprema y construyó una mayoría adicta, nombrando a desconocidos abogados cuyo único currículum era el ser amigos suyos.

Este sistema dejó una impronta notable en el modo de funcionamiento de la política y de la sociedad: dado que el mantenimiento del poder se alejó cada vez más de las opciones ideológicas o simplemente programáticas, la política en general, pero sobre todo el peronismo, fue convirtiéndose en una maquinaria de enorme plasticidad, capaz de sostener las ideas más diversas en tanto que garantizaran el ejercicio del poder. La actitud de los sindicatos más afectados por las privatizaciones y por el despido masivo de empleados fue una de las manifestaciones más evidentes del problema: a cambio de parte del negocio apoyaron a Menem con entusiasmo. Pero un simple recorrido por las biografías de buena parte de los políticos argentinos en activo y de las sucesivas coyunturas en las que se vieron involucrados es también revelador de esta situación. Si bien tanto en los diarios como en los programas televisivos de humor se regodean con los abruptos cambios de ideas, no se trata de simples contradicciones individuales, sino de un rasgo estructural del sistema político argentino. Menem dio un inmenso vigor y fortaleza al peronismo, que se consolidó como la fuerza hegemónica en Argentina, a cambio de lo cual renunció a la defensa de todo principio o, en rigor, se sometió a

¹³ Romero ha comparado el sistema con las bandas de guerreros germanos de la Alta Edad Media que marchaban a la guerra siguiendo a un jefe con la promesa de un botín. Véase ROMERO, L. A.: «La memoria del *Proceso...*», *op. cit.*

la defensa sucesiva de todos los principios: la plasticidad del peronismo y su sólido arraigo en las estructuras del Estado serían puestos a prueba con muy buenos resultados en los años sucesivos.

Alentado por estos éxitos, hacia el final de su mandato, Menem encaró una reforma constitucional destinada a habilitar su reelección, prohibida en la Constitución vigente. Inicialmente, la oposición radical rechazó la iniciativa, pero dado que Menem estaba dispuesto a llevar a cabo la reforma a cualquier precio (los votos en el Congreso no le alcanzaban, pero todo indicaba que la llamada «mayoría automática» de la Corte Suprema estaba dispuesta a exponer una extraña interpretación de la Constitución para habilitarla), en diciembre de 1993 se reunió con Alfonsín y sellaron el llamado Pacto de Olivos. La reforma fue aprobada al año siguiente y, en 1995, Menem fue reelegido con casi el 50 por 100 de los votos.

El año 1995 fue el que marcó la plenitud del poder menemista, pero fue también el del comienzo de su declive. Las crisis económicas desencadenadas en México y en el sudeste asiático minaron sus apoyos; las políticas de ajuste del nuevo Ministro de Economía, Roque Fernández, alentaron la conflictividad social, haciendo cada vez más visibles las consecuencias negativas de la convertibilidad. Ante la pasividad de la mayor parte de los sindicatos, nuevas modalidades de conflicto irrumpieron en la escena política. Una de ellas fue la «pueblada», como sucedió por ejemplo en la ciudad de Santiago del Estero, donde fueron destruidos varios edificios públicos. Otra fue el «piquete», el corte de carreteras y calles, en 1997, en varias provincias del interior del país. Otra modalidad, típica de las clases medias urbanas, fueron los apagones y los «cacerolazos».

En este clima, la oposición comenzó a organizarse; en 1994 apareció el Frente Grande, formado por disidentes peronistas y grupos socialistas, cuyo líder era «Chacho» Álvarez. Poco antes de las elecciones legislativas de 1997, el Frepaso y la UCR sellaron un acuerdo y fundaron la Alianza para la Justicia, el Trabajo y la Educación¹⁴. En octubre de 1997, la Alianza triunfó en los distritos más importantes del país: Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; en Córdoba, donde la alianza no se concretó, el radicalismo también

¹⁴ OLLIER, M. M.: *Las coaliciones políticas en la Argentina. El caso de la Alianza*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. GODIO, J.: *La Alianza. Formación y destino de una coalición progresista*, Buenos Aires, Grijalbo, 1998.

derrotó al peronismo. El liderazgo de Menem —quien a pesar de ciertos coqueteos con la idea ya no podía ser reelegido— tenía sus días contados, mientras su lugar comenzaba a ser ocupado por otra figura: Eduardo Duhalde, gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires. Entre ellos comenzó una disputa que no conoció límites: desde la manipulación de las instituciones hasta el asesinato liso y llano, todo recurso fue utilizado para destruir al rival. Pero la lógica de hierro que la jefatura de Menem había impuesto a su partido se volvía ahora en su contra, una vez que los dirigentes veían que era otro el jefe ascendente que podía garantizarles un adecuado botín. En franca retirada, al menemismo sólo le quedaba borrar las huellas de sus tropelías: con curiosa frecuencia fueron apareciendo los oportunos «suicidados» y hasta se llegó a volar un arsenal militar en la ciudad cordobesa de Río Tercero (que fue sometida durante horas al bombardeo de las esquilas) para borrar las pruebas del contrabando de armas a Ecuador y Croacia en el que estaban involucradas las primeras líneas del gobierno. Finalmente, poco antes de retirarse, Menem dio una última muestra de poder, boicoteando la candidatura de Duhalde y favoreciendo en todo lo posible al candidato de la Alianza, el radical Fernando de la Rúa. El humor social hizo el resto: las elecciones las ganó la Alianza con el 48,5 por 100 de los votos.

La Alianza: el camino hacia el desastre

De la Rúa era un dirigente muy conocido que, desde hacia algunos años, administraba la ciudad de Buenos Aires con cierta eficacia. Sin embargo, en poco más de dos años, una inédita rebelión popular de dimensiones y características desconocidas hasta ese momento precipitaron su renuncia en medio de una crisis inédita que fagocitó a varios presidentes en pocos días. Las causas de esta crisis fueron múltiples, aunque es evidente que la principal fue la situación asfixiante provocada por el sostenimiento de la convertibilidad, que puso al gobierno a un paso del abismo. Sin embargo, sólo la política explica por qué el gobierno decidió dar ese último paso.

En principio, la propia Alianza era un problema. La UCR era un partido de larga tradición y bien organizado que, además, gobernaba en muchas intendencias y varias gobernaciones. El Frepaso era una coalición de agrupaciones muy diversas sin arraigo territorial, cuyo

factor aglutinante era el prestigio de dirigentes como el ahora vicepresidente «Chacho» Álvarez. La Alianza había sido un buen instrumento para derrotar al peronismo en su ocasional declive, pero en nada se parecía a una coalición preparada para asumir el gobierno. Las sospechas y recelos mutuos entre radicales y frepasistas fueron innumerables y los gestos de concordia entre los principales dirigentes no contagiaron a los cuadros medios y bajos.

El propio presidente pareció sufrir un repentino cambio que convirtió al político exitoso y al prudente administrador en uno de los más torpes gobernantes de la historia argentina. La confesión de su propio ministro de Salud y médico personal, asegurando que el presidente sufría una enfermedad que alteraba en parte sus facultades mentales, tal vez sirva como una pista del por qué de este cambio. Como sea, De la Rúa tomó ante cada problema la peor de todas las decisiones posibles: en pocos meses no sólo había destruido la frágil coalición de gobierno, sino que había obligado a buena parte de su propio partido a refugiarse en una sorda oposición. Ni siquiera los intentos por manejar la situación al estilo menemista fueron eficaces: el soborno de varios senadores peronistas para que votaran una controvertida ley laboral salió a la luz y provocó la renuncia del vicepresidente en octubre de 2000.

Lo poco que quedaba de la Alianza había dejado de existir. El presidente quedó completamente aislado, rodeado de una insignificante corte de amigos y familiares sin mayores luces políticas. En medio de una de las peores crisis de la historia, Argentina avanzaba sin timón hacia el abismo. Cuando en marzo de 2001 el presidente convocó al economista radical Ricardo López Murphy para ocupar el Ministerio en cuestión, la situación era terminal: el Estado estaba al borde de la bancarrota¹⁵ y al nuevo ministro no se le ocurrió mejor idea que recortar drásticamente los gastos en áreas políticamente sensibles como la educación. Los estudiantes y la oposición se echaron a la calle y el radicalismo desautorizó al ministro, quien se vio forzado a renunciar a los quince días de haber llegado a la cartera. Desesperado, De la Rúa convocó para dicho Ministerio a Cavallo, pero la situación política y económica ya no tenía arreglo.

¹⁵ Éste era el mensaje oficial destinado a justificar los recortes, compartido por quienes, desde posiciones ortodoxas, veían los problemas argentinos desde una perspectiva fundamentalmente fiscal. De todos modos, el posterior estallido y la declaración de cesación de pagos confirmó en buena medida sus apreciaciones.

En diciembre de 2001 comenzó la debacle. El día 1, Cavallo anunció la retención compulsiva de depósitos bancarios («el corralito») y el dinero desapareció de la calle. Movilizaciones organizadas y espontáneas pedían cotidianamente la renuncia del gobierno. A mediados de mes comenzaron los saqueos a supermercados, que se multiplicaron espectacularmente hasta superar en pocos días todos los sufridos durante varios meses durante el gobierno de Alfonsín. Era evidente que a los primeros saqueos espontáneos les estaban sucediendo otros dirigidos y alentados por caudillos políticos del duhaldismo que veían en esta situación la posibilidad de alcanzar finalmente el gobierno que las urnas les habían negado. Ante la situación de descontrol, con las calles llenas de manifestantes, el presidente ordenó una represión que sólo logró agudizar más aún el conflicto. Luego consultó a la oposición y al Ejército, pero ambos le negaron cualquier tipo de apoyo. En medio de un caos callejero en todo el país, con disparos, heridos y muertos, el día 20, De la Rúa presentó su renuncia.

Bajo la sombra de la crisis: el 2001 y sus consecuencias

Sería imposible explicar detalladamente el conjunto de circunstancias políticas que siguieron a la crisis de 2001. Un punto, sin embargo, parece hoy evidente: la afortunada inserción de Argentina en el mercado mundial de alimentos y materias primas, que hizo olvidar bien pronto las consecuencias económicas de la crisis (tal vez demasiado pronto), oscureció un conjunto de consecuencias políticas que, en cambio, parecen haber llegado para quedarse por un largo tiempo. Señalaremos algunas de ellas.

La vertiginosa sucesión de presidentes que culminó, finalmente, con la llegada de Duhalde al gobierno en enero de 2002, manifestó una de las caras de la crisis: la evaporación del poder presidencial. Pero esta situación no fue sino el aspecto más notable de otras dos circunstancias: la *licuación* de la autoridad estatal y la ruptura de los canales institucionales de manifestación política de la sociedad, con los partidos políticos a la cabeza.

Durante varios meses, el país quedó en manos de un conjunto atomizado de gobernadores, la mayor parte de ellos pertenecientes al peronismo, que pudieron mantener la autoridad en sus provincias y encarar, sin esperar demasiado del Estado nacional, la difícil adminis-

tración de la crisis. La acuñación de monedas provinciales a la que recurrieron para financiar sus gastos no es sino la expresión más notable de esta repentina dispersión del poder.

Pero no se trataba sólo de gobernadores. Una sociedad movilizada, dueña absoluta de las calles, protestaba cotidianamente: desde los ahorristas que golpeaban las puertas de los bancos (tuvieron que ser blindadas), hasta los desempleados y «piqueteros» que demandaban planes sociales para su subsistencia. Pero no todo eran reivindicaciones ya que en muchos sitios se organizaban sistemas de trueque de bienes y servicios, mientras que en otros se reunían asambleas barriales dispuestas a discutir las bases de una nueva organización política y social. No faltó ni siquiera algún exultante dirigente de la izquierda que quiso ver en estas manifestaciones a los *soviets* de 1917. Aunque el diagnóstico fue un tanto apresurado, lo cierto es que, ausentes el Estado y la política, la sociedad parecía tomar las riendas, considerándose nuevamente una víctima inocente aunque ahora ya no de la Dictadura, sino de «los políticos».

La volatilidad de la situación quedó demostrada en junio, cuando un intento de Duhalde por imponer su autoridad utilizando a la policía para reprimir un piquete que avanzaba sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires terminó con el asesinato de dos militantes. Este suceso puso fin al gobierno de Duhalde, que se vio obligado a adelantar las elecciones y, prácticamente, a retirar a la policía de las calles. Luego de un complejo juego de intrigas y presiones, Duhalde ni siquiera fue capaz de imponer un sucesor y tuvo que dar su apoyo a Néstor Kirchner, ignoto gobernador de Santa Cruz. Aunque Kirchner quedó segundo en los comicios por detrás de Menem, la eventualidad de un balotaje, de una segunda vuelta —en la que todo indicaba que Menem sería destrozado en las urnas—, provocó la renuncia del ganador y la proclamación de Kirchner.

Entre su llegada al poder en 2003 y las elecciones de 2005, Kirchner comenzó una lenta reconstrucción del poder presidencial. Para eso utilizó diferentes modalidades: evitó toda clase de represión, aunque cooptó con éxito a varios grupos piqueteros a los que puso al servicio del gobierno (más de una vez fueron utilizados en lugar de la policía como fuerza de choque oficial); hizo suyas todas aquellas reivindicaciones sociales medianamente populares (desde un conflicto ecologista en la ciudad de Gualeguaychú, a los costes de serios desacuerdos con Uruguay, hasta la exigencia de seguridad contra el deli-

to, encabezada por el padre de un joven secuestrado y asesinado); adoptó con el fanatismo del converso la mirada sobre los años setenta proveniente de las asociaciones de derechos humanos, que ahora ya no trataban solamente de mostrar una sociedad víctima de la Dictadura, sino de revindicar la lucha armada de los grupos guerrilleros (así, en una maniobra de puro estilo *orwelliano*, cualquier opositor corría el riesgo de ser acusado como cómplice de ese abyecto pasado). A la inversa, buscó constantemente el enfrentamiento con enemigos débiles y con altas tasas de repudio en la opinión pública como, por ejemplo, Menem, las Fuerzas Armadas o algunos sacerdotes de ideas antediluvianas, para aparecer como el abanderado victorioso de las causas más justas y populares. Aunque su gobierno se inició con un saludable recambio de los miembros ampliamente desprestigiados de la Corte Suprema (fue éste otro de los enemigos débiles sobre los cuales avanzó), rápidamente disciplinó a la justicia federal (fuero con competencia sobre los funcionarios estatales) para evitar todo tipo de problema, mientras que el Congreso limitó su escasa acción a refrendar las contadas iniciativas del ejecutivo.

En 2005, el presidente se sintió con fuerzas para emprender su primera aventura arriesgada: el domino del peronismo. Para ello, sumó a su popularidad el uso de los fondos estatales para repartir premios y castigos, aunque una diferencia sustancial distinguió este caso del de Menem, ya que el control de esos recursos se concentró exclusivamente en manos presidenciales. Así, Kirchner no sólo disciplinó a buena parte de los gobernadores, sino que quebró la hegemonía de Duhalde en la provincia de Buenos Aires; incluso logró que la casi totalidad de los gobernadores e intendentes de la UCR abandonaran su partido y se alinearan detrás de su figura.

A un estilo de gobierno basado en el uso indiscriminado de la autoridad y en la ausencia de todo escrúpulo a la hora de utilizar los fondos públicos, se sumó el repentino bienestar económico y la popularidad de algunas de las causas llevadas a cabo para que, en 2007, Kirchner fuera reconocido como un presidente sólido, capaz de controlar con solvencia su sucesión, hasta el punto que imaginó poder inaugurar una especie de dinastía, colocando a su mujer, Cristina Fernández, en la presidencia.

Hasta marzo de 2008 todo parecía un éxito. Pero el primer problema serio reveló cuánto de espejismo había en ese diagnóstico y cuánto más profundas habían sido las consecuencias de la crisis. Un

conflicto relacionado con ingresos fiscales de entidades representativas de los sectores agrarios, que incluyó la movilización de miles de productores, muchos de los cuales siguieron el método piquetero y tomaron control de las carreteras, inició una escalada de enfrentamientos que literalmente paralizó el país durante cuatro meses. Kirchner creyó que su estilo basado en la confrontación y en opciones ideológicas radicales podía ser nuevamente beneficioso pero, esta vez, ante un rival verdadero, la estrategia fracasó. Luego de una enloquecedora voráGINE de manifestaciones, desabastecimiento, cortes de carreteras, acusaciones apocalípticas y violencia de todo tipo, el conflicto terminó con una derrota para el gobierno —el golpe de gracia, paradójicamente, se produjo en el Congreso Nacional a manos del propio vicepresidente— que puso a Cristina Fernández a un paso de la renuncia. La derrota pulverizó el sistema de poder elaborado por los Kirchner: hoy sus aliados de ayer lo han abandonado, una amplia mayoría social (estimada por las encuestas en alrededor de un 70 por 100) repudia al matrimonio gobernante, la situación económica se ha agravado (lo cual, además de afectar al humor social, socava los fondos para ganar lealtades) y, lo que es aún más serio, el peronismo delibera acerca de la sucesión de la presidenta a un año de su llegada al poder. Ante las desaforadas opciones ideológicas que intentó imponer el gobierno (según las cuales Argentina asistía a una batalla final entre una derecha reaccionaria y una izquierda salvadora), la política y la sociedad reales, poco afectas a las visiones apocalípticas, han reaparecido incluso en las propias órbitas gubernamentales, que han vuelto a buscar en «la caja», el dinero público, el mecanismo para financiar lealtades. Pero, a la vez, lo que parecía ser el comienzo de una dinastía gobernante —forma *sui generis* de reconstrucción del poder del Estado— ha dado paso a otra realidad, en la que la debilidad de las instituciones estatales parece ser un rasgo estructural. Y no son muchos los que se alarman por esa situación. Por el contrario, un extendido uso social de la palabra «democracia» remite más bien a una situación donde cualquier «derecho» autoproclamado se antepone a las leyes y a las instituciones. El futuro se presenta menos claro y optimista que hace apenas un año.